

V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009.

El campo en conflicto. Disputas y sentidos en torno a la Resolución N° 125.

Castro García, Celeste, Comelli, María, Ciccolella, Mariana, Negro Mariano, Godfrid, Julieta y Schvartz, Agustina.

Cita:

Castro García, Celeste, Comelli, María, Ciccolella, Mariana, Negro Mariano, Godfrid, Julieta y Schvartz, Agustina (2009). *El campo en conflicto. Disputas y sentidos en torno a la Resolución N° 125. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-089/68>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ezpV/xxQ>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

El campo en conflicto: disputas y sentidos en torno a la Resolución N° 125

Lic. María Celeste Castro García
Grupo de Estudios Rurales- IIGG- UBA
celestecastrogarcia@yahoo.com.ar

Lic. María Comelli
Grupo de Estudios Rurales- IIGG- UBA
comellimaria@hotmail.com

Lic. Mariana Ciccolella
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
mcicco@gmail.com

Lic. Mariano Damian Negro
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
mariano-negro@hotmail.com

Julieta Godfrid
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
julietagodfrid@hotmail.com

Lic. Agustina Schvartz
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
agustinas21@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN

Un eje central en la configuración político espacial de América Latina lo constituye el conflicto por la tierra. La redistribución del espacio y la reconfiguración de sus usos, operadas por la colonia mediante el avasallamiento de los modos de vida de los pueblos que habitaban Abya Yala y la práctica del exterminio, prefiguraron la política de concentración de la tierra así como las disputas por el acceso a ella, que permanecen vigentes hasta nuestros días. La conformación y consolidación de los Estados Nación, así, mantuvo vigente la colonialidad, *haciéndola* política pública. Pero la lucha por la tierra, no implica únicamente las disputas por el acceso y la tenencia, sino también por los sentidos que, quienes protagonizan estas disputas, le otorgan, es decir, por el acervo cultural que subyace a la significación que se le da a la tierra, en tanto territorio. De este modo, la lucha por la tierra pasa a entenderse en tanto disputa por el territorio en su dimensión material e inmaterial, involucrando modos de vida, prácticas de manejo del territorio, diversos modos de relacionarse con los bienes comunes, formas de conocimiento, etc.

Los campesinos y pueblos originarios de la región han protagonizado disputas territoriales de distinto tipo y alcance. En el camino han ido configurando un escenario regional que en la actualidad cuenta con una multiplicidad de experiencias organizativas a partir de las cuales se han constituido como sujetos políticos que disputan el territorio con gobiernos locales y empresas multinacionales, entre otros actores.

El conflicto agrario que tuvo lugar en la Argentina en el año 2008 a partir de que el Gobierno nacional proclamara la Resolución N° 125 sobre el aumento y la movilidad de las

retenciones a la exportación de productos agropecuarios, no es ajeno a los procesos mencionados, en tanto conflicto por la politicidad del espacio-territorio. La tesis central del presente trabajo consiste en que lo que se puso en juego durante dicho conflicto excedió la mera pugna por porcentajes de apropiación de la rentabilidad de la producción agropecuaria, en tanto se enmarcó en una disputa por los sentidos que cada actor interviniente otorga a la tierra y al territorio. Así, sostendremos que la invisibilización de determinados actores en los debates desencadenados respondió a estrategias políticas concretas de otros, operándose una lucha por los sentidos que pocos quisieron leer y muchos menos transmitir. En este sentido, el enfrentamiento entre “el campo y el gobierno” fue dibujado como un conflicto entre racionalidades enteramente opuestas, mientras se disputaban la representatividad de lo que ambos denominaron “pueblo” en un intento por arrogarse legitimidad para hacerlo. Esta operación discursiva produjo silencios y acalló los gritos de las luchas que vienen protagonizando el campesinado y las comunidades indígenas, junto a otros actores subalternos como los trabajadores desocupados, quienes cargan consigo las consecuencias de un modelo político, económico y social altamente excluyente, sostenido por esas mismas patronales agrarias que se levantaron en 2008 y promovido desde el Estado, gobierno tras gobierno.

En síntesis, la apuesta central que recorre el presente trabajo consiste en reflexionar acerca de los modos en que la configuración de las arenas en las que se desarrolló el conflicto agrario, el debate entre “campo vs gobierno”, contribuyó a producir ausencias, es decir un gran “desperdicio de experiencias” (Santos, 2006). De modo que intentaremos dar cuenta de los actores que, si bien participaron (se pronunciaron y actuaron) en el conflicto, permanecieron en las sombras, sin poder incidir activamente en el curso del mismo. En este sentido, nos proponemos “escuchar” y recuperar la capacidad agencial de estos actores cuyas miradas y voces fueron silenciadas por una “univocidad del discurso estatista” (Guha, 2002) que no permitió una discusión profunda del modelo de producción vigente, en el que los campesinos e indígenas no sólo se encuentran subalternizados sino que comienzan a convertirse en prescindibles dentro del modelo de agronegocio.

Nuestro marco teórico parte de la *perspectiva centrada en el actor* que reconoce la complejidad de lo social, es decir, el entramado de realidades y prácticas sociales en el cual los actores intentan aprehender las situaciones que enfrentan, generando procesos en los que se ponen en juego saberes diferenciales, relaciones sociales asimétricas y prácticas culturales que parten de racionalidades en tensión, disputando recursos materiales y simbólicos con

otros actores. Para ello, abordaremos nuestra investigación desde el paradigma “constructivista” que parte de la premisa de que frente a similares circunstancias estructurales, los actores responden con diferentes estrategias sociales propias que son el resultado de las interacciones, negociaciones y luchas que tienen lugar en sus mundos sociales.

Analizaremos los sentidos de las acciones en el marco de *arenas y dominios* (Long, 2007) a través de los cuales colisionan mundos sociales y culturales en lo que Norman Long denomina una *interfaz* o escenario de la acción donde los actores sociales se enfrentan y/o negocian marcos de interpretación. Los *dominios* identifican áreas de la vida social organizadas a partir de prácticas entrelazadas y valores que son reconocidos como el *locus* de ciertas reglas, normas y valores que implican grados de compromiso social aunque no sean percibidos de la misma forma por todos. Éstos no deben considerarse como dados a priori sino que son producidos y transformados a través de las experiencias compartidas y los conflictos entre los actores. En tanto las *arenas* son entendidas como espacios de encuentros sociales que pueden involucrar varios dominios, en cuyos contextos los actores confrontan entre sí por los recursos, valores y representaciones, estableciendo cultural y discursivamente sentidos y significaciones para alcanzar determinados objetivos. Ambas nociones ponen de manifiesto los elementos constrictivos y habilitadores que forman el *espacio de maniobra* de los actores y su relación permite “el análisis de los procesos de ordenamiento, regulación y disputa de valores sociales, relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder” (Long, 2007: 124).

DOS MODELOS ANTAGÓNICOS: Agronegocio y Soberanía Alimentaria

El modelo del agronegocio surge a partir de la implementación de medidas neoliberales en el sector agropecuario. Dichas medidas consistieron fundamentalmente en la eliminación de las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria, como por ejemplo la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, hecho que se produjo a través del decreto de desregulación del año 1991; pero también a partir de la privatización de silos y puertos, de la eliminación del banco de semillas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como de la flexibilización de las leyes de arrendamiento que posibilitaron la realización de contratos por cosecha. Todas estas medidas funcionaron como condición de posibilidad para que las grandes empresas transnacionales tomaran el control de la actividad agropecuaria. En efecto, dichas empresas lograron monopolizar “la provisión de semillas e

insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno (super e hipermercados) como para la exportación” (Teubal, 2008: 5). A estos cambios en el sistema regulatorio del agro se suma en el año 1996 la liberalización al mercado de la soja transgénica. A partir de entonces la lógica del agronegocio se vuelve hegemónica dentro del sector puesto que la producción pasa a orientarse fundamentalmente a la exportación de *commodities*, dentro de los cuales la soja se vuelve predominante, y ya no a la producción de alimentos para el consumo interno. La expansión de la lógica del agronegocio ha provocado profundas transformaciones. Por un lado, con respecto a la especialización en la producción de *commodities* ha desplazado a otras actividades agropecuarias, como por ejemplo la ganadería, y en este sentido ha debilitado la capacidad que históricamente ha tenido la Argentina de producir todos los alimentos necesarios para el consumo interno. Por otro lado, la producción de *commodities* supone la utilización de extensas unidades productivas (500 has como mínimo para obtener una rentabilidad media) y de paquetes tecnológicos que permitan la siembra directa, e incluyen tanto la utilización de una gran cantidad de herbicidas (agrotóxicos) como maquinaria de última tecnología. Por lo tanto, requiere de altos niveles de inversión que muchos pequeños productores no pueden afrontar, lo que ha provocado que gran parte de ellos se conviertan en rentistas, es decir, opten por arrendar sus tierras a los pools de siembra. En este sentido, el modelo del agronegocio tiende a un proceso de concentración de la producción agropecuaria en manos de las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, y de los pools de siembra, deteriorando a los pequeños productores y a la agricultura familiar. Tal es así que “entre los censos de 1998 y 2002 desaparecieron 25% de las explotaciones agropecuarias existentes en el país, o sea, 87 mil explotaciones (86% de las cuáles tenían menos de 200 has y 9% entre 200 a 500 has)” (Teubal, 2008: 6).

En este contexto, las comunidades campesinas e indígenas están siendo fuertemente afectadas por la profundización del modelo del agronegocio ya que el avance de la frontera agropecuaria ha acentuado las disputas por la tierra. En efecto, las comunidades campesinas e indígenas han sido víctimas de numerosos hechos de violencia a través de los cuales se intenta desalojarlas de las tierras que ocupan amparadas en las leyes veinteaños y en los derechos ancestrales (Grupo de Estudios Rurales, 2004)

Frente a ello, las organizaciones campesinas e indígenas han incorporado para enfrenar a este modelo, la lucha por la soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria ha sido creado por Vía Campesina y supone un cuestionamiento a las políticas

neoliberales aplicadas al sector agropecuario. La idea de soberanía alimentaria va más allá de la noción de seguridad alimentaria, que supone “el acceso físico y económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a una dieta que posibilite llevar una vida activa y sana” (Mariotti, 2009: 46). El concepto de seguridad alimentaria nace en paralelo a la aplicación de las reformas estructurales impulsadas por el agronegocio. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), es necesaria la creación de un excedente que permita garantizar el acceso alimentario de la población mundial. Para tales motivos, plantea que es preciso “la incorporación de nuevas tecnologías que puedan complementar a las de la “revolución verde”, y, por otro, el aumento de las superficies destinadas a la producción por medio de la reforma agraria” (García Guerreiro y Wahren, 2007: 4). De esta manera, el concepto de seguridad alimentaria destaca el rol fundamental del mercado en tanto generador de alimentos y señala las políticas a seguir por los países productores de alimentos. En dicho sentido, los gobiernos deberían “crear un marco económico y jurídico que promueva la existencia de mercados eficientes y justos que estimulen la movilización de los ahorros, las inversiones y la formación de capital del sector privado. Asimismo, deberán destinar una proporción apropiada de su gasto a inversiones que fomenten una seguridad alimentaria sostenible (CEC, 2008)” (Mariotti, 2009: 47).

Por su parte, la noción de soberanía alimentaria considera no sólo necesario garantizar el acceso al alimento, sino también el “el derecho de los pueblos a la producción de alimentos saludables y culturalmente apropiados mediante técnicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y su derecho a definir su propio sistema alimentario y agrícola” (Vía Campesina) En este sentido, la soberanía alimentaria supone no sólo priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, sino también el derecho de que quiénes producen y quiénes consumen a formar parte en la decisión de cómo, qué y cuánto se produce. Por tal motivo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) “promueve que los productores y consumidores tengan el control sobre todo recurso natural, para asegurar un sistema agroalimentario justo en términos sociales que haga primar el “valor de la vida” sobre todo principio de lucro económico; para lo cual impulsa acciones que fuercen a los gobiernos del mundo a no otorgar propiedad intelectual sobre la “vida” a las grandes empresas multinacionales, y a no autorizar el uso y consumo de alimentos o insumos genéticamente modificados (transgénicos)” (Mariotti, 2009: 48).

La soberanía alimentaria también supone el fortalecimiento de la agricultura familiar, que el modelo del agronegocio destruye, como forma de preservar la cultura de las comunidades campesinas y sus fuentes de trabajo, y en este sentido poder frenar el éxodo rural hacia las ciudades. Asimismo, en la medida en que estas organizaciones conciben a la tierra y al resto de los bienes naturales como medios de vida y no como meras mercancías, se oponen al uso de agroquímicos y semillas transgénicas, elementos que forman parte de los nuevos paquetes tecnológicos, no sólo por el daño que ocasionan al ambiente sino que además implica la pérdida de autonomía en cuanto a la posesión de las semillas por parte de los agricultores. En este sentido, la soberanía alimentaria plantea una nueva reforma agraria pero que surja de entre los pueblos y que respete la diversidad de las comunidades que la habitan.

Por tales motivos, las organizaciones campesinas e indígenas consideran que “la soberanía alimentaria no sólo es una visión-cosmovisión sino también una plataforma común de lucha que permite seguir construyendo unidad en la diversidad” (Mariotti, 2009: 52)

Hacia la polarización de la arena política

El inicio del año 2008 estuvo caracterizado por una tensión entre las entidades rurales, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y el Gobierno nacional, generada en un principio en torno a la política ganadera. El principal frente opositor del sector agropecuario estaba conformado por los empresarios de la carne, la leche y el trigo, que entre otras cosas, cuestionaban al Gobierno por la ausencia de políticas que promovieran un incremento de la producción y una mejora en los precios.

Mientras que el Gobierno rechazaba el pedido de la Mesa de Comercialización Lechera de aumentar el precio de la leche, decidió limitar las exportaciones de carne e impulsar una lista de precios máximos para trece cortes de carne vacuna de consumo masivo (acordada en una reunión con las cámaras de comercialización y frigoríficos).

En tanto, en el mercado internacional el precio de los granos, especialmente el de la soja y sus derivados, se mostraban en alza, justo en el mes de febrero, cuando la soja en la Argentina comenzaría a cosecharse.

Por su parte, en el mes de marzo, la FAA a través de un comunicado exigió a las autoridades nacionales la normalización del mercado del trigo; un precio lleno para los productores; valores accesibles para el consumidor; firme lucha contra la inflación; terminar con el

desfase entre la cotización local e internacional; incentivos para la producción; precio sostén y la recreación de la Junta Nacional de Granos; entre otras medidas (Diario La Nación, 5/3/2008). También comenzaban a realizar protestas a nivel nacional que reclamaban respuestas del Gobierno ante la profundización de la crisis ganadera, la transferencia monetaria de los productores trigueros a los exportadores y molinos harineros y el proceso de concentración que llevaría a la desaparición del pequeño y mediano productor.

Al tiempo que la tensión entre el Gobierno y estos sectores rurales crecía, la dirigencia de las cuatro entidades agropecuarias comenzaba a acercar posiciones ante la imposibilidad de concretar acuerdos que satisficieran a ambas partes.

En este contexto, el martes 11 de marzo, como parte de una nueva política para contener el alza del precio de los alimentos y la inflación, el ministro de Economía, Martín Losteau, anunció la Resolución N° 125/08 que consistía en la implementación de un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz, el trigo y los productos derivados que se obtienen de ellos¹. La medida fue rápidamente rechazada por la SRA, la CRA, la FAA y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), quienes se encontraban discutiendo acerca de la política agropecuaria con el bloque de la oposición, en la Cámara de Senadores. Las entidades interpretaron esta medida como una provocación por parte del Gobierno y se dio impulso a la conformación de la Mesa de Enlace (ME) y el inicio de una serie de fuertes protestas, que incluirían la no comercialización de granos, cortes de ruta y movilizaciones en varios puntos del país.

A medida que se iban sucediendo los días la tensión existente entre el Gobierno nacional y la ME fue incrementándose. El paro agropecuario, anunciado por las cuatro entidades, que en un principio consistía tan sólo en la no comercialización de carnes y granos por dos días, se fue extendiendo e incorporando diversos repertorios de acciones de protesta y nuevos actores. El paro se fue transformando en la “protesta del campo” en la que fueron confluyendo los diversos sectores del agro y operadores del mercado² junto con los

¹ La medida consistía en una estructura de valores móviles para los próximos cuatro años que se ajustaban día a día -automáticamente- a los precios internacionales. Teniendo en cuenta los precios actuales se registrarían subas entre siete y nueve puntos para las retenciones a soja y girasol y bajarían casi un punto las de trigo y maíz lo que, según el ministro, sería una forma de incentivo a su producción. A través de este esquema se buscaba retrotraer los precios de exportación fijos a los niveles de diciembre de 2007, por ejemplo, un chacarero que cobraba \$ 1.070 por tonelada pasaba a recibir de \$ 850 a \$ 900.

² Se puede resaltar la adhesión al paro agropecuario de: la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID); la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR); la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FEDIA); Frente Agrario Nacional (FAN); la Asociación de Productores de Granos del Noroeste Argentino (PROGRAMO); la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA); la Federación de Acopiadores de Granos (FAG); la Asociación Cadena Argentina de la Soja

pequeños y medianos productores agropecuarios³, quienes comenzaron a realizar asambleas, tractorazos, cortes de ruta y movilizaciones en el interior del país.

El diálogo se encontraba doblemente condicionado: el Gobierno estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y aplicar una política diferencial para los pequeños productores, sólo si la ME levantaba el paro mientras que los productores agropecuarios anunciaban que permanecerían en las rutas hasta que el Gobierno dejara sin efecto la Resolución N° 125. Fue en este contexto que el 25 de marzo, la presidenta Cristina Fernández definió a los cortes de ruta como “piquetes de la abundancia” y de esta manera, el conflicto corporativo comenzaba a complejizarse y a polarizar fuertemente la arena política. Se escuchaban cacerolazos en las principales ciudades del país y comenzaban a entretenerse nuevas alianzas entre sectores urbanos y rurales en contraposición al Gobierno, apoyados a su vez por algunas gobernaciones provinciales y organizaciones sociales.

Una diversidad de voces se posicionaban en torno al conflicto: algunos intentando separarse de la política del Gobierno nacional, como el gobernador de Santa Fe (Hermes Binner), el gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), o el senador nacional Carlos Alberto Reutemann; otros, instando al diálogo, como la Iglesia Católica, la Unión Industrial Argentina, el legislador porteño Aníbal Ibarra, el diputado nacional Miguel Bonasso, Carlos Heller y el productor de soja Gustavo Grobocopatel; mientras que la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), la Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) proclamaban en conjunto la derogación del decreto.

Por otra parte, otras organizaciones sindicales, corporativas y sociales se manifestaban a favor de las retenciones como mecanismo redistributivo y se alineaban con el Gobierno: tal era el caso de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Evita, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Libres del Sur, el Frente Barrial 19 de Diciembre, Barrios de Pie y miembros de la juventud Kirchenista, entre otros.

(ACSOJA) y las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, entre otros.

³ La suba de las alcúotas y el carácter indirecto de las retenciones, sumado a la falta de una política de compensaciones destinada a los pequeños y medianos productores, generó en ellos un fuerte rechazo hacia el Gobierno debido a que esta medida reduciría prácticamente en un 10% el precio de venta justo en el momento en que la mayor parte de la comercialización comenzaría.

A medida que crecían las protestas, el Gobierno y sus aliados fueron construyendo un discurso antinómico en el que los dirigentes de la ME eran caracterizados como los “golpistas” que atentaban contra la democracia que el Gobierno intentaba proteger.

Muchos fueron los momentos en los que se vio la imposibilidad de construir un espacio de diálogo entre los actores protagonistas del conflicto. Desde el 2 de abril hasta el 5 de mayo, la ME decidió levantar el paro para intentar acercar posiciones, aunque el Gobierno recién convocó a los dirigentes el 11 de abril. A partir de ese momento se realizaron múltiples reuniones entre la ME, ministros y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y del INTA para consensuar políticas respecto a la carne y los granos, sin que impactaran positivamente en la resolución del conflicto y culminando con la renuncia, del ministro de Economía, Martín Lousteau, el 24 de abril.

Luego de los actos del 25 de mayo (cuyo significado patrio fue capitalizado tanto por el Gobierno como por la ME, constituyéndose en un elemento más de disputa), el Gobierno suspendió el diálogo y la ME decidió volver al paro el día 29. Esta vez, la Gendarmería se hizo presente en los cortes de ruta y el Poder Judicial decidió intervenir. Mientras que en San Pedro (Provincia de Buenos Aires) detuvieron y procesaron a ocho productores, en Gualeguaychú se detuvo a Alfredo De Angeli (FAA) y a dieciocho productores más.

Frente a este escenario cada vez más confrontativo, se agudizaban los cortes, se sumaban los transportistas al conflicto y comenzaban a ser más frecuentes los cacerolazos en las ciudades más importantes del país.

Con la decisión del Gobierno de llevar como proyecto de Ley al Congreso la Resolución N° 125, el conflicto se distendía y se trasladaba desde las rutas hacia la Plaza del Congreso. Mientras que las organizaciones afines al Gobierno y las que apoyaban a la ME se disputaban el espacio en la plaza, instalando carpas e inflables frente al Congreso, los dirigentes agropecuarios y diversas organizaciones sociales se acercaron al trabajo en comisiones para dar cuenta de sus posiciones. A su vez, los productores que se encontraban en las distintas provincias, se acercaban a los legisladores de sus localidades con el fin de que su reclamo fuera llevado al ámbito del Poder Legislativo. Si bien la Resolución fue ratificada en la Cámara de diputados, en el Senado, luego de una larga sesión y un empate de posiciones, el vicepresidente, Julio Cobos, votó negativamente el 16 de julio, por lo que las retenciones móviles finalmente fueron suspendidas.

Así, la tensión existente entre el Gobierno nacional y la ME derivó en un conflicto en torno a la Resolución N° 125 que afectaría a todo el país y se prolongaría hasta fines de julio de 2008, aunque no implicaría el cuestionamiento a la profundización del modelo del

agronegocio, “conformado por grandes empresas, semilleras y pools de siembra que juntamente con un reducido número de exportadoras y con un componente financiero importante inciden fuertemente en la dinámica del sector agropecuario argentino” (Giarracca *et al*, 2008:39). Sin embargo, estos actores, a diferencia de las entidades rurales y los productores autoconvocados, no aparecieron en la escena pública.

La dinámica confrontativa y el proceso de polarización desembocó no sólo en el pasaje de un conflicto corporativo hacia uno político, sino que además la lógica de amigo-enemigo operó de tal forma que no permitió escuchar más que esas dos voces, deslegitimando la aparición de otras posturas críticas a ambas posiciones. Esta confrontación entre dos actores, “campo” y “gobierno”, que tan solo disputaban *posiciones* en el modelo del agronegocio, no permitió que otros actores pudieran ingresar al debate.

Las organizaciones campesinas e indígenas intentaron durante este conflicto agrario complejizar el proceso de polarización, heterogeneizar y deconstruir la frase “Todos somos el campo”, dar cuenta de la diversidad productiva, cultural y social que alberga la palabra “campo”, pero no lograron ser escuchados. En muchos momentos del conflicto denunciaron públicamente, a través de comunicados, manifestaciones y hasta en el debate parlamentario, su mirada crítica hacia el modelo del agronegocio y dieron cuenta de sus escenarios cotidianos: los desalojos, los desmontes, la contaminación, los efectos de los agrotóxicos sobre sus animales y sus familias, etc. Tal vez, estas otras voces no pudieron ser escuchadas por su posición de subalternidad en el modelo del agronegocio vigente, pero también porque exigían una discusión profunda de este sistema de producción que no estaba siendo cuestionado por ninguna de las dos partes del conflicto.

LOS ACTORES INVISIBILIZADOS EN EL CONFLICTO

Organizaciones territoriales urbanas

En términos generales, podemos decir que los movimientos sociales no alineados con el kirchnerismo mantuvieron frente al conflicto una posición que emergió de una lectura crítica de los procesos políticos desencadenados y aquellos soslayados por el conflicto en torno a las retenciones móviles, complejizando la trama de disputas que atravesaban dichos procesos. En cuanto a las organizaciones territoriales urbanas tomaremos el caso del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el espacio *Otro camino para superar la crisis*, y la Campaña Nacional Contra el Hambre y la Inflación, por la diversidad de sectores que se aglutinaron en torno a las acciones promovidas desde dichos espacios, la continuidad que

dieron a sus reclamos y la manera en que denunciaron el entramado de dominios en los que, para estos actores, se vivenciaban las consecuencias del modelo.

Ya el 25 de marzo de 2008 el FPDS, emitía un comunicado en el que deconstruía los términos en que los actores que protagonizaron el conflicto por la Resolución N° 125 presentaban el problema. Para el FPDS "...Gobierno, entidades de grandes productores, medios de comunicación, hablan del 'campo' ignorando a los millones de campesinos pobres, desplazados de sus tierras, perseguidos, arruinados por el desmonte sin control, la explotación minera y el modelo sojero", tanto como a los trabajadores que siguen por debajo de la línea de pobreza, las poblaciones donde la "exclusión social estructural hace estragos", quienes no pueden sino leer con escepticismo la disputa entre quienes "juegan su propio juego al margen de nuestros intereses" (FPDS, 2008).

De este modo, el FPDS denunciaba el acuerdo básico concretado entre el Gobierno y los grupos más concentrados de la actividad agropecuaria, en función de profundizar el modelo del agronegocio que tiene como correlato la fuerte concentración y transnacionalización del capital en manos de los proveedores de insumos, frigoríficos exportadores y grandes productores. Su posición consistía en defender la política de retenciones a los grandes terratenientes y pools sojeros, diferenciando a los pequeños productores y la necesidad de una urgente redistribución y socialización de las riquezas, entendiendo que la justificación social de la política de retenciones era posible sólo si se la integraba a una política impositiva progresiva (que no gravara el consumo y la producción, sino la ganancia). El FPDS caracterizaba el accionar del Gobierno en el conflicto a partir de su orientación a quedarse con una proporción mayor a la obtenida hasta entonces de las enormes ganancias producidas por la exportación de la producción agropecuaria, sobre todo de la soja, no sólo sin cuestionar la lógica que subyace al modelo del agronegocio, sino convirtiendo al mismo en "su principal vía de recaudación, ignorando cualquier perspectiva de reformar las reglas de juego respecto a la tenencia, concentración y uso de las tierras productivas en nuestro país..." (FPDS, 2008).

Cabe destacar que una organización como la mencionada, que cuenta con una fuerte impronta urbana por el hecho de surgir de Movimientos de Trabajadores Desocupados de Capital Federal y el GBA, logró articular desde el principio mismo del conflicto junto a otros sectores y organizaciones, un discurso que corría el eje de la disputa campo versus Gobierno, presentándose en el espacio público de forma articulada con los movimientos campesinos e indígenas (MNCI, MCC, entre otros), poniendo el eje en la demanda por una reforma agraria integral que *garantice tierra, trabajo y soberanía alimentaria para todo el*

pueblo. De modo que se construyeron en la arena pública puntos de encuentro entre las reivindicaciones y estrategias de los campesinos y pueblos originarios y las poblaciones urbanas marginalizadas, en base a la demanda por una política alimentaria que beneficie a los sectores populares, la redistribución de la riqueza y el acceso a la tierra.

Fue en base a estos puntos (reforma agraria, redistribución de la riqueza, reforma tributaria, políticas de soberanía alimentaria) que el FPDS impulsó movilizaciones en coordinadas en varias provincias. En efecto, en el marco del conflicto el FPDS confluyó junto a otras organizaciones sociales de impronta territorial, referentes sindicales y un conjunto de intelectuales de izquierda en el espacio OTRO CAMINO PARA SUPERAR LA CRISIS, impulsando desde allí la “Campaña Nacional contra el Hambre y la Inflación, por Soberanía Alimentaria y Socialización de las Riquezas”, que contó con varias movilizaciones en todo el país. Desde el Otro Camino y la Campaña se promovía la facultad del Gobierno a fijar retenciones a las exportaciones, entendiendo ello no bastaba para solucionar la crisis social, estructural, que venían sufriendo y pagando los sectores populares. De allí que las propuestas se dirigían a modificar el régimen tributario vigente, la creación de una política integral que signifique una real redistribución del ingreso a los sectores populares, la creación de centros de abastecimiento autogestionados por las organizaciones sociales y una política agropecuaria que tendiese a lograr la soberanía alimentaria y no a profundizar el modelo del agronegocio, extractivo y exportador.

Así, en el marco de la Campaña, el 29 de mayo se realizaron escarches y movilizaciones en Capital Federal, Rosario y Chaco, denunciando a los “responsables y principales beneficiados con un sistema económico que no responde a los intereses populares”⁴ (Gacetilla de convocatoria, *Soberanía Alimentaria* del 29/05/2008).

Dando continuidad a estas acciones, el 11 de julio se realizaron protestas coordinadas en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Rosario, Chaco, Tucumán y La Pampa, bajo el

⁴ Los principales reclamos se centraban en: *aumento general de salarios y blanqueo de todos los trabajadores; control popular de los precios para frenar la inflación, así como sanciones a quienes especulen con precios y stocks; eliminación total del IVA a los alimentos de la canasta básica; aumento progresivo del impuesto a las ganancias, a la riqueza e impuesto a la renta financiera; modificación del modelo agropecuario que permita que la tierra esté bajo control de los que la trabajan, lograr la soberanía alimentaria y terminar con el modelo de saqueo de los bienes naturales; retenciones a los grandes terratenientes, pooles sojeros y agroindustria; redistribución de las ganancias para favorecer la actividad de los productores familiares; centros de abastecimiento alimentario de primera necesidad a bajo costo, gestionados por las organizaciones populares y apoyados por el estado; efectivo abastecimiento de la garrafa social en los barrios populares.*

lema “Con Independencia del campo y el Gobierno, hay otro camino para superar la crisis”. En el Congreso nacional, delegados de la denominada *Marcha de las Canastas Vacías* entregaron sus propuestas a los jefes de bloque y a la Comisión de Presupuesto. El 16 de octubre, en el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, se realizó una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por el espacio promotor del Alba de los Movimientos Sociales, el espacio Otro Camino para superar la Crisis y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)- Regional Buenos Aires, en la que confluyeron organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, organizaciones ambientales y movimientos territoriales urbanos. Las organizaciones resumían su posición lamentando la paradoja “de que un país con una gran riqueza productiva en el plano agrario, y que cuenta con la capacidad para producir alimentos para once veces su población, esté más preocupado hoy por la suba o baja del precio de la soja en lugar de resolver los problemáticas alimentarias de millones de sus habitantes.” (Gacetilla de convocatoria, PDF 15/10/2008). Las organizaciones integrantes del espacio Otro Camino y de la Campaña Nacional, luego del voto “no positivo” de Julio Cobos en el Senado, dieron continuidad a esta política de denuncia, articulando de modo propositivo las voces de las poblaciones rurales y urbanas, principales perjudicados por la profundización del modelo del agronegocio.

Pueblos originarios

Entre los diversos pueblos originarios del país que movilizaron su voz en un intento por recuperar gritos de lucha históricamente silenciados, el Consejo Asesor Indígena (CAI) y la Red Puna (integrantes del MNCI), así como comunidades indígenas del Chaco argentino⁵ y de la provincia de Salta, expresaron sus posiciones respecto del conflicto agrario.

Dentro de las acciones de protesta emprendidas por las comunidades indígenas en el marco del conflicto encontramos que el 1 de abril, representantes de comunidades indígenas de San Antonio de los Cobres (Provincia de Salta), asistieron al acto que se realizó en la Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno, quienes explicaron su presencia en la Plaza por el hecho de que la crisis logró sacar a la luz problemas ecológicos que sufrió su provincia luego de la sojización. A su vez, explicaban que “hay mucho poder por parte del campo” e incluso hay gobernantes que tienen sus intereses en la plantación de soja, “como el ex gobernador

⁵ La Comunidad del Pueblo Tupi Guaraní Iguopeigenda de Río Blanco Banda Sur, la Comunidad Aborigen Las Juntas (KOLLA), La Comunidad Ava Guaraní Campo Chico, la Comunidad Ava Guaraní Mitre de Oran, la Comunidad Ava Guaraní 2 de abril, la Comunidad Ava Guaraní San Francisco, la Comunidad Ava Guaraní Tapeiguapegui del Río Tarija, la Comunidad Ava Guaraní Cua Cuariño Ge Zenta, La Comunidad Ava Guaraní El Progreso Pichanal.

salteño Juan Carlos Romero”. “Nosotros siempre fuimos tratados como esclavos, el peón rural es el peor tratado de todos”, afirmaban (Página 12, 2/04/08). El 28 de junio, mientras se realizaban los acampes frente al Congreso Nacional, comunidades indígenas del norte argentino instalaron una carpa en un intento por hacer visible el hecho de haber sido expulsados de sus tierras ante el avance de la soja transgénica.

Marcando una estrategia reivindicativa y propositiva distinta a las anteriores, en clara confrontación con las posturas esgrimidas por los protagonistas del conflicto “campo-gobierno”, el 2 de junio *Comunidades aborígenes Indígenas de la Puna y Quebrada Jujeña*, miembros de la *Red Puna*, publicaron un comunicado titulado “NO SOMOS CAMPO, SOMOS TIERRA Y TERRITORIO”, en el que manifestaban estar a favor de las retenciones como medida para frenar el avance del modelo de los agronegocios y la soja transgénica, aunque establecían claramente que ello no bastaba “para lograr justicia económica en nuestro país” (REDH, 23/06/08). Por el contrario, para ello era “necesario distribuir la riqueza, frenar los desalojos de campesinos y comunidades aborígenes y que el Estado entregue las tierras que ancestralmente nos pertenecen (...) establecer un modelo de producción agroalimentaria que garantice los alimentos para toda la población y a precios accesibles.” (REDH, 23/06/08). Así, sostenían que cualquier política tendiente a modificar la situación de crisis estructural por la que atravesaba el 70% de los productores del país, esto es, los campesinos, indígenas y pequeños productores, debía “contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios”, actores que no eran representados por las “entidades del campo”, que “solo pronuncian los dictados del agronegocio”. “Lo nuestro es una forma de producción y un modo de vida, que pese a su invisibilidad histórica, reviste gran importancia para el país, entre otras cosas por el aporte que hacemos a la soberanía alimentaria, la generación de empleo y el arraigo rural.”, dictaminaban. Para la Red Puna, el reclamo por bajar las retenciones era ajeno a las problemáticas por las que atravesaban campesinos y pueblos originarios: “Porque antes de disputar mayores márgenes de ganancias, todavía hoy continuamos reclamando por el acceso a derechos básicos elementales como la tierra, el agua, el manejo de los recursos naturales, la salud, la educación, los caminos, en suma: ¡queremos justicia!” (REDH, 23-06-08). El comunicado también denunciaba al Foro de la Agricultura Familiar como “una pantalla con la cual la Federación Agraria Argentina negocia sus intereses y cargos en el gobierno, usando nuestro nombre” (REDH, 23/06/08).

En la misma línea, el CAI afirmaba mediante un comunicado el 16 de junio: “Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el Gobierno y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena” (Indymedia Argentina, 17/06/08). Y agregaban: “No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate ‘nacional’ que haya analizado –menos cuantificado– el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del Bicentenario”, políticos y economistas que no pueden “imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista. En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los Estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los ‘inversores’ y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aun con nosotros viviendo dentro” (Indymedia Argentina, 17/06/08).

Por su parte, comunidades de la región del Chaco argentino denunciaban en una carta abierta conocida el 1 de julio: “la soja transgénica ha traído los desalojos que faltaban para despojar a las comunidades guaraníes, kollas, wichis, pilagás, mocobíes y tobas que estaban en la llanura (chaco) restante en este país, las anteriores llanuras fueron ‘despejadas’ por obra del General Roca” (Macayo, 2008) asimilando las condiciones de producción del exterminio que realizó la Colonia o Julio A. Roca, con el producido por el avance de la frontera agropecuaria. Entre las consecuencias de este avance reconocían: “De repente, comunidades que no habían sido percibidas –invisibles en tierras no rentables– durante más de sesenta años, hoy son atacadas con topadoras...”, al tiempo que los campos y ríos son envenenados, se pierde la diversidad biológica de los territorios y las comunidades son marginalizadas en los centros urbanos; todo ello “en nombre de la soja” (Macayo, 2008). Las comunidades chaqueñas, exigían la restitución de sus territorios, así como la prohibición del cultivo con soja transgénica, entendiendo que la suba de las retenciones no solucionaban el problema de fondo: “Nosotros, los hijos de la tierra, pedimos a la presidenta y a los legisladores; se lo pedimos así, muéstrenos un solo beneficio social de la soja transgénica y retiramos nuestro pedido” (Macayo, 2008).

Podemos afirmar que, en términos generales, los pueblos originarios remarcaron durante el conflicto (a través de comunicados y cartas abiertas), los problemas que el avance del agronegocio, y en especial del cultivo de la soja, implicaban para el cuidado de sus tierras,

sus vidas y su cultura ancestral, aunque lo hicieron desde posiciones distintas: unos mostrándose en la escena pública apoyando al Gobierno, otros manteniendo una clara independencia del mismo. En definitiva, todos los pronunciamientos definían con claridad la disputa subyacente al problema agrario: la tensión existente entre territorialidades antagónicas, esto es, la promovida por el Agronegocio (identificada con las entidades agrarias, y la mayor de las veces también con el Gobierno) y la que profesa la Soberanía Alimentaria como bandera de lucha y resistencia de pueblos originarios y campesinado.

Movimiento Nacional Campesino Indígena

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), surge en 1986, y se conforma por una gran cantidad de organizaciones⁶, que agrupan a unas 15 mil familias de productores de siete provincias en el centro y norte del país. A nivel internacional la organización está ligada a Vía Campesina, que es un movimiento internacional que nuclea a múltiples organizaciones campesinas, desde 1992, en 69 países diferentes, bajo la consigna de la soberanía alimentaria y la defensa de la agricultura familiar. A su vez, mantiene relación con sectores urbanos como el Frente Popular Darío Santillán.

El 17 de Abril de 2008 el MNCI se movilizó en siete provincias (Jujuy- Red Puna, en Salta-Encuentro Calchaquí, Misiones - MOCAMI, en Santiago del Estero- MOCASE-VC, Córdoba- MCC, Mendoza-UST y en Buenos Aires), para conmemorar el Día Mundial de la Lucha Campesina. La convocatoria se realizó para “rechazar el actual modelo agropecuario, impulsar la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y expresar las voces campesinas e indígenas en lucha, lejanas a las entidades patronales que pretenden representar el `campo” (MNCI, 2008). Frente a la postura adoptada por las cuatro entidades

⁶ MOCASE VC, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidades de Molinos de Salta, Red Puna de Jujuy, SERCUPO, organizaciones de Buenos Aires) COCITRA, Poriajhu Vía Campesina Consejo Asesor Indígena (CAI), Coordinadora Mapuche Neuquina, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita, CEPAR, Mesa de PP-Chaco, Asociación de Mujeres Campesinas-Entre Ríos, UNPEPROCH-Chaco, Productores Minifundistas “La Nueva Estrella”, Fuerza Criolla, Consejo Asesor Cooperativa Río Negro, Comisión Central de Campesinos, Unión Trabajadores Rurales (UTR)-Misiones, Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones (UTTERMI), Agrupación Padre Mugica, ICECOOP-Cooperativa de trabajo, Pequeños productores Villar Berm, Foro de Agricultura Familiar-Entre Ríos, Observatorio del Sur, Taller Ecologista, CPN-asesora, EFA JAHA ITATU, Mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe, Movimiento Norte Grande, Asociación Biodinámica Argentina (ABDA), Huerteros urbanos de Rosario, Cooperativa Surco (Bosque de Org.ch Sur Río Negro), Lof. Mapuche “Mariano Solo”, CAUDAL-Salta, Em Renguedo-Rosario-La Colmena, UFA, EFA Mensú Peguera, Desarrollo Rural-Chaco, Efa Ñamembae, AF Cooperativa Agropecuaria, EFA COEMBOTA, PUSALI (Productores Unidos Santiago Liniers), Foro de Agricultura Familiar-Chaco, UOCB, APPO, EFA (Pejú Porá), Organización Tierra Nuestra, Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda., MAC (Movimiento Agrario Correntino), MAM (Movimiento Agrario de Misiones), ARCAN Río Negro, Frente Campesino Por Tierra y Trabajo el INTI-Jujuy.

rurales de la ME, el MNCI planteaba “Estos empresarios y entidades patronales que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y ataque a cientos de comunidades campesinas indígenas, la falta y el encarecimiento de los alimentos, la contaminación e intoxicación de pueblos enteros con agrotóxicos, y la destrucción de economías locales y regionales. Al mismo tiempo, ganancias millonarias son repartidas entre empresarios y Gobierno”. (MNCI, 2008).

El 24 de Junio mientras en la Capital Federal el Frente Nacional Campesino y el Foro Nacional de Agricultura Familiar intentaban expresar su posición en la Cámara de Diputados, en la ciudad de Rosario se realizaba el Encuentro Nacional de Organizaciones Campesina, pueblos indígenas, pequeños productores, y agricultores familiares, donde participó el MNCI junto con otras organizaciones.

Desde los distintos espacios donde el MNCI participó se diferenció de “ese campo con soja, superávit y dirigentes ricachones nucleadas en entidades tradicionales “, planteando que “El verdadero campo no tiene nada que ver con eso: la tierra, la naturaleza y las familias campesinas son vida, solidaridad y trabajo” (Ecoportal, 20/08/2009). Se encargaron de denunciar el “saqueo de este modelo agropecuario de monocultivo” (Ecoportal, 20/08/2009) y se plantearon como fervientes defensores del modelo de soberanía alimentaria.

Frente Nacional Campesino

El Frente Nacional Campesino se creó el 17 de abril del 2008, en el marco del Día de la Lucha Campesina, con el objeto de abrir un espacio de representación para organizaciones campesinas, comunidades de pueblos originarios, agricultores familiares y trabajadores de la tierra, que no se consideraban representados por ninguna de las entidades que conformaban la ME, a quienes definieron como representantes de los sectores más favorecidos por el modelo del agronegocio. En el acta fundacional, que fue firmada por numerosas organizaciones⁷, remarcaron como una de sus principales demandas la defensa de la

⁷ El documento fundacional fue firmado por: el MOCAFOR (Movimiento Campesino Formoseño), el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del estero), el MOCAJU (Movimiento Campesino de Jujuy), el MAM (Movimiento Agrario Misionero), la Mesa de Agricultura Familiar de Buenos Aires, la Mesa Provincial de Organizaciones de productores Familiares- Francisco Álvarez, la Asociación Civil Los pirujas, la ONPIA (Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina), la Asociación de Familias Productoras de la Cuenca Río Luján, las Familias Productoras de Cañuelas, la Cooperativa APF- Florencio Varela, el CEDEPO (Centro ecuménico de educación popular)-Florencio Varela, la Mesa Provincial Zona Sur Madre Tierra-Tres Arroyos, la FECOAGRO (Federación de Cooperativas Agropecuarias)-San Juan, la COOPAFES (Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar y la Economía Social)-Mendoza, la Asociación Civil AMAUTA-Villa Sarmiento, el Parque Pereyra-Grupo San Juan, el Puente Verde, la

soberanía alimentaria, porque consideraban que “la soberanía alimentaria cuestiona en los hechos el modelo concentrador de la tierra y la renta en nuestro país, y su secuela de pobreza, inequidad y exclusión” (FNC, 2008a). En este sentido, hicieron hincapié en la necesidad de profundizar el proceso de regularización y tenencia de la tierra a través de una amplia reforma agraria que permitiera frenar los desalojos, de los que eran víctimas las comunidades, y resolver el problema estructural de la tierra. De este modo, el FNC expresaba una problemática que trascendía la discusión acerca de las retenciones móviles, y que apuntaba a discutir sobre las consecuencias que tiene el modelo del agronegocio sobre las comunidades campesinas e indígenas. Para el FNC, no se trata exclusivamente de discutir acerca de cómo se reparten las ganancias que genera el sector, sino qué, quién, cómo y dónde se produce. Por eso, el FNC incorpora también como parte de sus demandas “la defensa de los recursos naturales, sociales, culturales y ancestrales como forma de vida y continuidad de nuestra historia en el fortalecimiento de nuestras economías regionales, la diversificación de la producción, la creación de bancos de semilla y el desarrollo de canales de comercialización alternativos” (FNC, 2008a). Con respecto a la Resolución N° 125, se manifestaron a favor ya que consideraban que era una medida legítima para promover la redistribución de la riqueza, y en este sentido, no sólo repudiaron la medida de fuerza de la ME, sino que a su vez cuestionaron que las cuatro entidades se asumieran como las representantes del “campo” cuando todas ellas representaban sólo a los sectores más favorecidos por el modelo del agronegocio.

Varias fueron las acciones que llevó adelante el FNC para tratar de introducir en el debate abierto por la Resolución N° 125 el cuestionamiento al modelo del agronegocio y la necesidad de una nueva política agropecuaria que defendiera la soberanía alimentaria y fomentara la producción familiar. En efecto, el 8 de mayo de 2008, dirigentes del FNC mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete y el Secretario de Agricultura en la cual presentaron sus principales demandas, entre las que se encontraba la necesidad de diseñar políticas diferenciadas para los pequeños productores, y acordaron la apertura de espacios de discusión técnica. A su vez, realizaron un Segundo Congreso el 23 de mayo de 2008 en la sede de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en el cual volvieron a manifestar un enérgico repudio al paro agropecuario, señalando que se oponían “a que unas pocas

Asociación de Técnicos del AMBA, la TUPAJ KATARY-Jujuy, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente ECOSUR, el MCL (Movimiento Campesino de Liberación), la ICECOOP, la FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), la Cooperativa QUILMES, la CAUQUEVA (Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles) y la Asociación de Técnicos de La Pampa

empresas agroexportadoras decidan por la vida de cuarenta millones de argentinos” (FNC, 2008b: 236). A su vez resaltaron la necesidad de profundizar la intervención del Estado en pos de un *Modelo de Desarrollo Rural Estratégico* para garantizar la “soberanía alimentaria” y la redistribución de la riqueza con justicia y equidad y solicitaron que las autoridades tomaran medidas para frenar los desplazamientos forzados y desalojos compulsivos de familias de pequeños y medianos productores agropecuarios. En este sentido, denunciaron que “Los atropellos forman parte de la campaña sistemática que desarrollan empresas agropecuarias y mineras para apropiarse de las tierras, los montes y las aguas que defienden los campesinos e indígenas” (FNC, 2008b: 237). Por otro lado, el 24 de junio de 2008, participaron de la reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en donde los referentes del FNC intentaron exponer que venían siendo negados desde hace mucho tiempo y que venían sufriendo el deterioro de los cultivos tradicionales y de los bosques nativos por la expansión de la soja transgénica. Sin embargo, sus planteos fueron permanentemente interrumpidos por los diputados del PRO, la UCR y la CC, que planteaban que lo único que querían discutir era de la Resolución N° 125 y amenazaban con retirarse del recinto si no se discutía al respecto. En este marco, el FNC, junto a otras organizaciones campesinas, indígenas y de agricultura familiar de todo el país, entre las que se encontraban las Ligas Agrarias y el MNCI, decidieron llevar adelante un encuentro en Rosario, en el que quedó conformada la Mesa Coordinadora Nacional (MCN). Su última aparición pública fue cuando junto a militantes de la Asamblea Popular Plaza Dorrego y otras organizaciones políticas, realizaron un festival frente al Congreso, bajo la consigna “Hay otro campo. Por la democracia con redistribución de la riqueza: sí a las retenciones. No al hambre”, en apoyo a las retenciones móviles.

A lo largo de todo el conflicto el FNC, como otras organizaciones campesinas, no sólo han desnaturalizado la idea de un “campo” homogéneo, mostrando la multiplicidad de intereses y actores que lo componen, sino que a su vez han puesto en evidencia que una gran cantidad de comunidades están siendo profundamente perjudicadas por el avance del modelo del agronegocio que se defendía, tanto desde la ME como desde el Gobierno nacional.

Mesa Coordinadora Nacional

El día 24 de junio del 2008, en la ciudad de Rosario, se reunieron diversas organizaciones campesinas, comunidades indígenas, pequeños productores y agricultores familiares de todo

el país⁸, con el fin de fijar una posición en común frente al conflicto establecido entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias. El encuentro significó un acercamiento entre organizaciones, que pese a tener como objetivo común la lucha por la soberanía alimentaria, poseían estrategias distintas.

Aspirando a construir “un nuevo espacio de representación plural”, decidieron conformar una Mesa Coordinadora Nacional (MCN) que representara las reivindicaciones comunes de todas las organizaciones presentes, y nombrar delegados y delegadas con el fin de hacer escuchar sus demandas frente a los funcionarios y los legisladores. Sus principales reclamos eran: “Facilitar la participación efectiva de las organizaciones campesinas y pueblos indígenas en el diseño de políticas agrarias y el fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo integral de nuestro sector. Apoyo económico y tecnológico a las comunidades campesinas indígenas y cooperativas (...) Efectivizar la suspensión inmediata de los desalojos de campesino, pueblos originarios y pequeños productores (...) Exigir nueva legislación de acceso a la tierra para la recuperación de territorio campesino y de pueblos indígenas” (Proclama campesina indígena, 2008:231).

Durante el encuentro, todas las organizaciones validaron las retenciones móviles con reintegro como una herramienta legítima de regulación de los mercados y distribución de la riqueza. A la vez, exclamaron que las entidades rurales no representaban los intereses de las

⁸ Las organizaciones que formaron parte del encuentro fueron: el FNC (MOCASE Juríes, MOCAFOR, MOCAJU e Hijos del Monte), las Ligas Agrarias, el MNCI (MOCASE Vía Campesina, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidas de Molinos de Salta, red Puna de Jujuy, Sercupo, organizaciones de Buenos Aires), la Coordinadora de Comunidades Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina, el Poriájhu Vía Campesina, el CAI, la Coordinadora Mapuche Neuquina, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, la Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita, el Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas, la Mesa de Pequeños Productores del Chaco, la Asociación de Mujeres Campesinas – Entre Ríos, la Unión de Pequeños Productores del Chaco, los Productores Minifundista “La Nueva Estrella”, la Fuerza Criolla, el Consejo Asesor Cooperativo de Río Negro, la Comisión Central de Campesinos, la Unión Trabajadores Rurales - Misiones, la Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones, la Agrupación Padre Mujica, la la Cooperativa de Trabajo Icecoop, Pequeños Productores Villar Berm, el Foro de Agricultura Familiar – Entre Ríos, el Observatorio del Sur, el Taller Ecologista, la CPN-asesora, la FA JAHA ITATU, la mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe, el Movimiento Norte Grande, la Asociación Biodinámica Argentina, los Huerteros urbanos de Rosario, la Cooperativa Surco, la Lof. Mapuche “Mariano Solo”, la Caudal - Salta, el Em Renguedo-Rosario-La Colmena, la UFA, la Escuela de la Familia Agrícola “Mensú Peguera”, el Desarrollo Rural – CHACO, la Escuela de la Familia Agrícola “Ñamembae”, la Cooperativa Agropecuaria AF, la Escuela de la Familia Agrícola Coembota, los Productores Unidos Santiago Liniers, el Foro de Agricultura Familiar – Chaco, la Unión de Organizaciones de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, la Escuela de la Familia Agrícola “Pejú Porá”, la Organización Tierra Nuestra, la Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda., el Movimiento Agrario Correntino, el Movimiento Agrario de Misiones, la Asociación de Productores ARCAN - Río Negro, el Frente Campesino Por Tierra y Trabajo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Jujuy.

comunidades campesinas, los pueblos originarios, la agricultura familiar y los pequeños productores. Para ellos, los integrantes de la ME personificaban a las corporaciones transnacionales de los agronegocios. En este sentido, denunciaron que son violentados y desalojados cotidianamente de sus territorios por los integrantes de estas entidades agropecuarias que actúan impunemente con la complicidad del poder judicial y político local.

Además, hicieron público su repudio a la forma en que ha sido mostrado el conflicto agrario desde los medios de comunicación: “han ocultado la diversidad del campo argentino y han desfigurado los rostros del genuino trabajador y trabajadora rural” (Proclama campesina indígena, 2008:232).

Frente al conflicto agrario, la MCN proponía: “caminar hacia una transformación profunda del modelo agropecuario, que avance hacia la reforma agraria integral, agroecológica y la soberanía alimentaria” (Proclama campesina indígena, 2008:232). Asimismo, argumentaban que “para que pueda ser posible la distribución de la riqueza y la alimentación de todo el pueblo argentino es necesario la distribución y democratización del acceso a la tierra y los bienes naturales y el fortalecimiento de las economías campesinas, pueblos indígenas y de la agricultura campesina” (Proclama campesina indígena, 2008:232).

Como un intento de aflorar en escena un sector relevante en la estructura agraria argentina, la MCN surgió no sólo como un ensayo de articular, pese a tener estrategias distintas, una lucha en común por parte de los sectores campesinos, indígenas y pequeños productores familiares, sino también diferenciarse de las entidades agropecuarias que estaban protagonizando la disputa con el Gobierno nacional en torno a las retenciones móviles. En este sentido, es interesante resaltar el intento de la MCN de cuestionar el proceso de homogeneización configurado en torno a la concepción de “campo” durante el conflicto agrario, dando cuenta de la diversidad inherente al área rural argentina. A su vez, entendemos que el encuentro no surge como consecuencia directa de una experiencia en común de sus integrantes, sino que es producto de una necesidad coyuntural. Por tal motivo, creemos que la MCN, luego de la votación contra la Resolución N° 125, se disolvió dado su propio proceso de formación.

Desprendimiento de Federación Agraria

La FAA se alineó durante el conflicto con las grandes corporaciones del agro argentino, perdiendo representatividad y confianza en productores pequeños que integraban la federación.

Así sufrieron el alejamiento y la disidencia de dirigentes que habían representado la voz de los pequeños productores y de la agricultura familiar dentro de la FAA. Hay dos casos representativos, uno es el alejamiento de Pedro Cerviño y la disidencia de José Luis Livolti. El 29 de Junio Pedro Cerviño renunció a su cargo como jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la FAA, por diferencias respecto de las políticas llevadas adelante por la conducción de la federación junto con la ME, el mismo señalaba “La Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus intereses. No puede representarnos porque defendemos modelos de desarrollo agropecuario distintos. No tenemos nada que ver con Sociedad Rural y Confederaciones Rurales” (Página 12, 29/06/2008).

Cerviño era uno de los coordinadores del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), e incorporaba, dentro de la FAA, la voz de pequeños productores de entre 5 y 15 hectáreas, que se dedicaban al cultivo tradicional y la cría de animales, amenazada por el modelo del agronegocio.

El martes 24 de Junio, el FONAF, que tenía entre sus coordinadores a Cerviño, intentó plantear su postura frente al conflicto en la segunda reunión de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados. En la Cámara, el diputado por el PRO, Federico Pinedo, junto a los diputados radicales, Gustavo Cusinato, Carlos Ulrich, Liliana Bayonzo y el diputado por la Coalición Cívica Adrián Pérez, gritaban en el recinto “retenciones, retenciones, 125,125” (Página 12, 25/06/2008) interrumpiendo la exposición del FNC, del FONAF y de representantes de los pueblos originarios. Lo poco que logró plantear el FONAF muestra profundas discrepancias con la postura adoptada por la FAA junto a la ME “No estamos en contra de nuestros compañeros, sí de los que hacen agronegocios. La agricultura familiar es la diversidad de la producción, la diversificación y no el monocultivo. La tierra tiene que ser un bien social, para que en el Conurbano puedan cultivar y vivir como lo hacían muchos productores en sus pueblos de origen” (Página 12, 25/06/2008).

La actitud de los diputados en el recinto, y las resistencias a incluir otras voces dentro de la FAA, fueron separando a Cerviño de la misma, así también como a muchos productores pertenecientes al FONAF. Frente a las retenciones Cerviño planteaba que “son necesarias para frenar el avance de la soja” pero reconocía las limitaciones de la medida y agregaba que “hacen falta políticas de infraestructura, de salud, de vivienda, de educación y de inversión para agregar valor y se requiere de una batería de incentivos públicos a la agricultura familiar” (Página 12, 29/06/2008)

El segundo caso representativo es la postura disidente dentro de la FAA de José Luis Livolti, un productor afiliado a la entidad, que por otra parte lidera el Movimiento Campesino de Liberación (MCL). El movimiento está en todo el país desde que en el 2002 crearon una corriente de izquierda nacional agraria dentro de la FAA. Livolti planteó durante el conflicto que la FAA se “derechizó” durante los últimos años y que pasó a representar a los intereses de los productores sojeros de la pampa húmeda, que son poseedores de entre 400 y 500 hectáreas que se transformaron en el último tiempo en rentistas de sus propios campos. “No estoy de acuerdo con Buzzi porque se contradice todo el tiempo. Éramos una unidad hasta que ellos giraron a la derecha. Sentimos dolor por no coincidir”(Crítica 24/03/2009). Por otra parte, planteó que el eje del conflicto fue mal encarado por parte de la FAA. Desde el MCL “proponemos un debate sobre la crisis económica y hablar de la contención de empleos para que no se despida a más nadie y no de las retenciones a la soja. Están equivocados los ejes” (Crítica 24/03/2009). Otra de las diferencias que tuvieron con la FAA fue por la firma de una solicitada donde la entidad rechazaba la estatización del comercio exterior de granos, frente a lo cual el MCL declaró: “Estamos a favor de que exista un ente regulador del comercio de granos, carne y lácteos con participación popular” (Crítica 24/03/2009).

Frente a la polarización entre el gobierno y la ME que realizaron los medios de comunicación, el MCL hizo hincapié en que la ME no fue representativa y que “La mayoría del campo está en otro lado. Está en las economías regionales, en la agricultura familiar y en los pueblos originarios. Hay otro campo que es mucho más grande numéricamente y que económicamente podría representar muchísimo más y ser la garantía de la soberanía alimentaria” (Crítica 24/03/2009).

CONCLUSIONES

Como afirmáramos en líneas precedentes, la introducción de políticas neoliberales en la producción agraria dio lugar al surgimiento del modelo del agronegocio que, a diferencia del modelo agroindustrial que permitía una inserción, aunque subordinada, de la pequeña producción campesina al sistema productivo, tiende al arrinconamiento del modo de producción rural (Barbetta, 2005). La contrapartida del avance de este modelo ha sido el fortalecimiento de numerosas organizaciones campesinas e indígenas, que en un primer momento asumieron como estrategia central la lucha por la tenencia de la tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas (Barbetta, 2005).

A partir de este proceso de reorganización y de lucha se produjeron nuevas subjetividades, que al desnaturalizar el orden existente, pudieron ampliar las fronteras de sus reivindicaciones. Es así como la soberanía alimentaria se configuró como el eje articulador de sus demandas, estableciendo y reivindicando la construcción de territorialidades antagónicas, en contraposición a la territorialidad del agronegocio. El territorio, en este sentido, es visto como un espacio en el que se asienta la cultura, construyendo territorialidades desde prácticas culturales de manejo y apropiación de la tierra que construyen identidades (Porto Gonçalves, 2001). Los territorios “son componentes básicos de los mundos de vida de los sujetos y atraviesan las experiencias, los saberes, los modos de enfrentar la reproducción material la vida” (Giarracca, 2003: 21). De manera que estas *otras territorialidades* involucran dimensiones materiales y simbólicas como la producción para la vida, la defensa de modos de vida basados en prácticas ancestrales del manejo del territorio, respetuosos de los bienes comunes, y la autonomía para decidir qué, quién, cómo y dónde se produce. El proceso de recomposición y fortalecimiento de las organizaciones campesino-indígenas habilitó la recuperación del sentido de comunidad, que se relaciona con “la reapropiación de una tradición familiar “campesina”, compuesta por una cultura y costumbres profundamente enraizadas que confluyen para construir un sentido particular en relación con la tierra” (Barbetta, 2005: 436). En esta constelación de sentidos que promueven las territorialidades campesinas e indígenas, la tierra es concebida como el espacio donde se desarrolla la vida, como un espacio que no *se posee*, sino del cual *se forma parte*. En este marco la defensa de la tierra se entiende como la defensa de un “modo de vida”, de una cultura campesina que implica un uso y apropiación particular de los bienes comunes. La lucha por la tierra es resignificada como lucha por el territorio.

La proclamación de la Resolución N° 125 fue lo que dio lugar al paro agropecuario. Sin embargo, lo que en un principio pudo ser un conflicto sectorial entre el Gobierno y un sector específico de la economía, terminó transformándose en un conflicto político (Giarracca *et al*, 2008). La dicotomización del conflicto en la arena política fue posible a partir de que las entidades agropecuarias se autoproclamaron representantes del “campo”, construyendo la imagen de un campo homogéneo; mientras que el Gobierno, lejos de desnaturalizar esta idea, contribuyó a reforzarla en pos de fortalecer el supuesto de que el conflicto implicaba el enfrentamiento de dos racionalidades antagónicas. Esta idea de un solo “campo” provocó la invisibilización de una gran cantidad de actores que a lo largo de todo el conflicto han intentado desnaturalizar esta idea, mostrando la multiplicidad de intereses y actores que lo componen. En efecto, numerosas organizaciones campesinas, indígenas y urbanas,

intentaron complejizar el debate abierto a partir de la Resolución N° 125, incorporando la crítica al modelo del agronegocio, la denuncia de las nefastas consecuencias que el mismo acarrea tanto para el modo de vida campesino como para los sectores populares urbanos, así como la defensa de la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado por los bienes comunes. Si bien todas estas organizaciones y comunidades indígenas se manifestaron a favor de las retenciones móviles, como una medida legítima para la efectiva redistribución de la riqueza, evidenciaron su insuficiencia para enfrentar el avance del modelo del agronegocio. Para ello consideraron que era necesario el diseño de una nueva política agropecuaria que contemplara las necesidades de las comunidades campesino-indígenas, así como una profunda transformación del sistema tributario vigente que permitiera una real redistribución del ingreso (quitando el IVA de los alimentos y gravando las ganancias, la renta petrolera y minera, etc.).

Si bien las diferentes organizaciones compartían las mismas reivindicaciones, encararon diferentes estrategias políticas para expresar sus reclamos. Pero lo que pusieron en evidencia para quienes quisieran hacerse eco de sus reclamos, fue que los términos en que presentaban el conflicto la ME y el Gobierno estaban dejando por fuera de todo debate la diversidad de realidades que constituyen el mundo rural. Y esto implica hacer visible el hecho de que ese mundo está compuesto por actores que promueven territorialidades antagónicas: la de la soberanía alimentaria y la del agronegocio, cada una de las cuales es construida por una diversidad de actores, la mayor parte de los cuales no fueron escuchados, (campesinado, pueblos originarios) o no quiso aparecer en la escena pública (Monsanto, Grobocopatel, APRESID, etc.). Sin tener conciencia de ello, no es posible pensar ninguna política agropecuaria ni fiscal que intente realmente redireccionar el destino de las políticas públicas en pos de transformar las reglas de juego vigentes que marginalizan, violentan y empobrecen a las mayorías.

En síntesis, entendemos que en esta exclusión, lo que efectivamente se invisibilizó fue la disputa existente al interior del agro, entre el modelo del agronegocio y el modelo de la soberanía alimentaria. Asumiendo que “el territorio es mucho más que un espacio geográfico, se encuentra cargado de sentidos y formas de ser rehabilitado y reconstruido, y es esta multiplicidad de usos y sentidos la que se expresa, en muchas ocasiones, a modo de disputa territorial” (Wahren, 2009:3). El territorio, así, es visto como un espacio *material* e *inmaterial* construido por relaciones sociales que portan una particular visión del mundo. Entre las distintas lecturas del mundo existentes hay una representación que se impone conforme a las relaciones de poder imperantes (Fernandes, 2005).

Por lo tanto entendemos que la construcción del conflicto en los términos de “Campo vs Gobierno”, efectivamente supuso una disputa por la apropiación de porcentajes mayores de la renta extraordinaria producida por el alza de los precios de la exportación de commodities. Pero que la invisibilización de los *otros* actores que intentaron hacer oír su voz, operó en función de invisibilizar una disputa mayor, aquella que se reedita cotidianamente en el mundo rural: la disputa entre territorialidades antagónicas, que involucran racionalidades contradictorias.

Bibliografía

- Barbetta, P. (2005), “Movimiento campesino de Santiago del Estero: luchas y sentidos en torno a la problemática de la tierra”, en Giarracca, N. y Teubal, M. (Coord.) *El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Buenos Aires, Alianza.
- Fernandes Mançano, B. (2005), “Movimientos socio – territoriales y movimientos socio - espaciales”, en Revista *OSAL*, N° 16, CLACSO, Buenos Aires.
- FNC (2008a), Documento fundacional, en Enredando: http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=39291
- FNC (2008b), “Los productores invisibles”, en Revista *OSAL*, N° 24, CLACSO, Buenos Aires.
- FPDS (2008), “Oligarquía y campesinos pobres: un análisis del Frente Popular Darío Santillán”, en PDF: <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/anuncios?p=3566&more=1&c=1>
- García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2007) “Seguridad Alimentaria, Cultura y Soberanía: transformaciones en el agro y perspectivas en tensión”; V Encuentro de Educadores de Ciencia y Tecnología Educación Ambiental para la construcción de una Agenda Escolar Regional, San Bernardo.
- Giarracca, N. (coord.) (2003), *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad. Lules en Tucumán.*, Buenos Aires, La colmena.
- Giarracca, N. et al (2008), “Paro Agrario. Un conflicto alargado”, en Revista *Realidad Económica*, N° 237, IADE, Buenos Aires.
- Guha, R. (2002), *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, Crítica.
- Grupo de Estudios Rurales (2004), “17 de abril: Día Internacional de la Lucha Campesina”, en Revista *Realidad Económica*, N° 203, IADE, Buenos Aires.
- Long, N. (2007), *Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*, México, CIESAS- El Colegio de San Luis.
- Macayo, G. (2008), “Carta Chaqueña Originaria a los argentinos por la prohibición de la soja.”, en Indymedia Argentina: <http://argentina.indymedia.org/news/2008/07/611866.php>
- Mariotti, D. (2009), "Comunidades narrativas contrahegemónicas, historias subalternas y sentidos emergentes. El caso de la coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo", mimeo.

- MNCI (2008), “Por la vida campesina indígena Contra los agronegocios y el saqueo Conmemorando el Día Mundial de la Lucha Campesina”, en PDF <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/04/17/p3615>
- Porto Gonçalves, C. W. (2001), *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*, México, Siglo XXI Editores.
- Proclama campesina indígena (2008), en Revista *OSAL*, N° 24, CLACSO, Buenos Aires.
- Santos, B. de S. (2006), *Renovar la teoría crítica y reinventar. La emancipación social*, Buenos Aires, CLACSO.
- Teubal, M. (2008), “Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo”, en Revista *Laboratorio*, N° 22, CEyDs, Buenos Aires.
- Vía Campesina, "La soberanía alimentaria es nuestra alternativa a la liberalización comercial en la agricultura" en Biodiversidad: <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/51546>
- Wahren, Juan (2009), “Territorialidades en disputa: Movimientos Sociales, Autogestión y Recursos Naturales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi (Salta, Argentina)”, XXVIII Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA), Río de Janeiro.

Otras fuentes

DERF, Agencia Federal de Noticias: <http://www.derf.com.ar>

Diario *Clarín*, de Buenos Aires.

Diario *Crítica*, de Buenos Aires

Diario *La Nación*, de Buenos Aires.

Diario *Página 12*, de Buenos Aires

Diario *Perfil*, de Buenos Aires

Ecoportal: <http://www.ecoportal.net>

Enredando: <http://www.enredando.org.ar>

Indymedia: <http://argentina.indymedia.org>

Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI): <http://www.mnci.org.ar>

Otro Camino para superar la crisis: <http://otrocaminio.wordpress.com/>

Prensa de Frente (PDF): <http://www.prensadefrente.org/>

Red Solidaria por los Derechos Humanos (REDH): <http://www.redh.org>

Soberanía Alimentaria: <http://soberaniadealimentos.blogspot.com>